JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.

Acción de Tutela No. 11001 31 03 025 2024 00066 00.

Resuelve el Juzgado la acción de tutela formulada por WILLIAM MANCO DAVILA contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ –ARCHIVO CENTRAL-; trámite dentro del cual, se vinculó al JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.

1. ANTECEDENTES

1.1. El señor William Manco Dávila interpuso acción de tutela implorando la protección constitucional de su derecho fundamental de petición. Pidió que se ordene a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá, dar respuesta su petición del 16 de enero de 2024, procediendo a desarchivar el proceso No. 11001400301220030061800.

1.2. Como hechos relevantes manifestó, en síntesis, que el 13 de julio de 2023 realizó el trámite correspondiente ante la accionada, para obtener el desarchive del proceso con radicado 11001400301220030061800 que cursó en el Juzgado 12 Civil Municipal de esta ciudad, gestión que fue registrada con el consecutivo 7648. Como el proceso no ha sido liberado, el 16 de enero de 2024 formuló derecho de petición ante la convocada a fin de tener información acerca de esa solicitud; sin embargo, de ese requerimiento tampoco ha obtenido respuesta.

1.3. Admitida la acción constitucional, se dispuso oficiar a la conminada y juzgado vinculado para que rindieran un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela, y así mismo, remitieran copia de las actuaciones judiciales.

1.4. EL JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ informó, que en ese despacho cursó el proceso Ejecutivo Singular radicado bajo el No. 2003-00618, de BANCO DEL CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. contra CELIDETH CASTILLO PATERNINA y HELLEN CECILIA CARBONO DE CARBONO, el cual terminó el 7 de diciembre de 2009, siendo remitido a la Oficina de Archivo, en la “CAJA 95 de 2021 TERMINADOS”.

Solicitó negar el amparo frente a esa sede judicial, por no haber infringido ningún derecho fundamental al accionante.

1.6. Por su parte, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ, – ARCHIVO CENTRAL-, no allegó contestación dentro del término otorgado.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La acción de tutela es un mecanismo eminentemente excepcional y residual idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

2.2. El presente trámite se inició, fundamentalmente, por la presunta vulneración del derecho de petición. Frente a éste, el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 -por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, y el cual se acompaña con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al párrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado "la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto".

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que, a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones, volvió a ser de 15 días.

2.3. Ahora, pese a que el accionante no invocó como vulneradas otras garantías constitucionales, de los hechos y pretensiones aducidos en el escrito de tutela, se logra observar que se encuentran en riesgo los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, frente a los cuales ha sostenido la Corte Constitucional

“Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. (...) Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no sólo sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además, respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde resolver.

(...)

Existe de esa manera una estrecha relación entre el acceso a la administración de justicia y el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, no obstante, no puede perderse de vista que el contenido esencial de este último difiere del de aquél, puesto que éste se refiere no a la posibilidad de acceso a la jurisdicción ni a la obtención práctica de una respuesta jurídica a las pretensiones formuladas, sino a una razonable dimensión temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto. Esta razonabilidad es establecida, en principio, por el legislador al expedir las normas que regulan los plazos para el desarrollo de los diferentes procesos y la adopción de las decisiones dentro de los mismos.

El Constituyente, coherente con el reconocimiento que hizo de estas garantías, estableció el siguiente mandato: “Los términos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, del cual se infiere, tal y como lo ha precisado esta Corporación desde sus primeras providencias, que “la Constitución Política de 1991 está inspirada, entre otros muchos, en el propósito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero también entre otros funcionarios públicos, de incumplir los términos procesales acarreado a los destinatarios de la administración de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus más elementales derechos¹.”

¹ Sentencia T-747 de 2009

De conformidad con la jurisprudencia constitucional antes transcrita, es claro que el acceso a la administración de justicia, no solo se traduce en la posibilidad de acudir a las jurisdicción competente en uso de las acciones que resulten procedentes, sino además tener una efectiva protección de los derechos y garantías, y una pronta decisión de los conflictos, todo lo cual se debe realizar dando cumplimiento a los principios de celeridad y cumplimiento de los términos previstos para desarrollar las diferentes actuaciones judiciales.

2.2. En el caso de estudio, advierte este despacho que el accionante pretende, mediante la presente queja constitucional, el desarchivo del Proceso No. 11001400301220030061800, solicitud que puntualmente está contenida en el derecho de petición que invoca como vulnerado.

De acuerdo con las pruebas aportadas y lo manifestado en el escrito de tutela, se observa que el accionante solicitó el desarchivo del proceso desde el 17 de julio de 2023, sin que a la fecha se observe contestada dicha petición. Tampoco se acredita que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central-, haya efectuado el desarchivo del expediente de acuerdo con lo solicitado; es más, a pesar de haber sido notificada de la presente acción constitucional, no allegó contestación alguna frente a los hechos y pretensiones que motivaron el ejercicio constitucional, ni indicó haber liberado el expediente, motivo que conlleva a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1191, teniendo como ciertos los hechos que dieron origen a la presente queja constitucional.

Debe precisarse, que a la fecha en que se profiere esta decisión, no se evidencia ni el informe requerido, tampoco el desarchive efectivo del proceso referido, para dejarlo a disposición de la autoridad judicial que conoció del asunto, menos se evidencia prueba de haberse brindado respuesta a la petición de la parte actora; máxime cuando el trámite de desarchive viene siendo adelantado desde el 13 de julio de 2023, es decir, desde hace más de 7 meses, situación que resulta lesiva de los derechos del accionante.

Atendiendo a que los expedientes archivados están bajo la custodia de las direcciones seccionales, a través de las oficinas de archivo y toda vez que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, tiene a cargo esa función por expresa orden del Consejo Superior de la Judicatura², para esta judicatura, la conducta omisiva de dicha dependencia transgrede los derechos fundamentales de la accionante, dado que situaciones como las que nos ocupan

² Acuerdo 1213 de 2001 del Consejo Superior de la Judicatura

solo pueden tenerse por satisfechas a través del desarchivo efectivo del proceso, lo que ocurre al poner a disposición del juzgado de conocimiento el proceso solicitado; pues de lo contrario, el interesado de manera alguna puede acceder a su derecho al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

Por último, es menester señalar que no se encuentra por este juez constitucional, que el Juzgado 12 Civil Municipal haya incurrido en actuación u omisión que conlleve a la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, pues de su parte no se presenta un impedimento al acceso a la administración de justicia, más aun, cuando es claro que la solicitud de desarchive debe ser atendida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

3. CONCLUSIÓN

En estas condiciones se ampararán los derechos fundamentales invocados por la accionante y se ordenará a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUDICIAL – OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL BOGOTÁ realizar la búsqueda y desarchive del expediente No. 11001400301220030061800, dejándolo a disposición del JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, a fin de que esa autoridad judicial lo ponga en conocimiento de los sujetos procesales y pueda resolver las solicitudes elevadas dentro de esa actuación judicial.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

Con fundamento y apoyo en lo dicho, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

4. RESUELVE

4.1. Conceder el amparo constitucional de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia de WILLIAM MANCO DAVILA, por lo antes expuesto.

4.2. Ordenar a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – ARCHIVO CENTRAL-, que en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a realizar la búsqueda y desarchive del expediente No. 11001400301220030061800, dejándolo a disposición del JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, a fin de que esa autoridad judicial lo ponga en

conocimiento de los sujetos procesales y pueda resolver las solicitudes elevadas dentro de esa actuación judicial.

En el evento de no hallarse la actuación, en el mismo término deberá informarlo y certificarlo al peticionario y al Juzgado 12 Civil Municipal de Bogotá para lo pertinente.

4.3. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.4. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0861304b1071e03f1279bb35f667e6d5ddcf289685ab92b7d81e2bf072c232cc**

Documento generado en 28/02/2024 04:22:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>